



CUT: 84402-2021

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0099-2022-ANA-GG

San Isidro, 29 de noviembre de 2022

VISTOS:

El Informe N° 0083-2022-ANA-STECH de fecha 02 DE JUNIO DE 2022, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad nacional del Agua; el expediente administrativo disciplinario N° 84402-2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Nota de envío N° 189-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU recibido por la Unidad de Recursos Humanos el día 13 de diciembre de 2019, la administración local del agua Pucallpa remitió a la referida unidad, el cargo de la carta N° 172-2019-ANA-OA-URH mediante la cual la Unidad de Recursos Humanos en su condición de órgano sancionador, remitió el informe N° 042-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU al servidor Julio César Labeguerre Incháustegui, para que de considerarlo necesario ejerza su derecho de informar oralmente sus descargos de manera personal o través de su abogado defensor, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra del referido servidor;

Que, mediante el informe N° 042-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU de fecha 15 de noviembre de 2019, la administración local del agua Pucallpa en su condición de órgano instructor en el procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra del servidor Julio César Labeguerre Incháustegui, recomendó al órgano sancionador imponer la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, en contra del referido servidor por la comisión de las faltas disciplinarias previstas en los literales a) y d) del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, con las cartas N° 170 y 165-2019-ANA-AAA.U-ALA-PUCALLPA notificadas los días 21 y 17 de octubre de 2019, respectivamente, la Administración Local del Agua Pucallpa en su condición de órgano instructor, dispuso instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui por la presunta comisión de las faltas administrativas disciplinarias previstas en los literales a) y d) del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, a través del Informe N° 244-2019-ANA-STEAC de fecha 05 de setiembre de 2019, el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ANA, recomendó al Administrador Local del Agua Pucallpa en su condición de órgano instructor el inicio del PAD en contra del referido servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui;

Que, mediante el Informe N° 003-2019-ANA-AAA.U-D-L-SAM de fecha 21 de enero de 2019, la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali informó a la Jefatura de la ANA, presuntas irregularidades por parte del servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui, para que, a través de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios se proceda a efectuar el deslinde de las responsabilidades administrativas que hubiera lugar;

Que, de otro lado, la prescripción es una institución jurídica que, en virtud al transcurso del tiempo, genera ciertos efectos respecto de los derechos de las personas o respecto al ejercicio de algunas facultades que posee la administración pública, como el ejercicio de su facultad sancionadora que tiene efectos sobre sus servidores y los particulares;

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que *“La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario”*¹. Por lo que, establecer un plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los regímenes laborales propios del Estado no es más que el reconocimiento del derecho a prescribir como parte del derecho fundamental al debido proceso;

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional en el marco de los procesos penales, se ha pronunciado de la siguiente manera: *“La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional toda vez que se encuentra vinculada al contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso”*²;

Que, en similar sentido se pronunció la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República en la Casación N° 2294-2012-La Libertad³, cuando afirmó que *“El derecho a prescribir tiene rango constitucional, según lo previsto por el artículo 139 numeral 13 de la Constitución Política del Estado”*;

Que, en esa línea, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la prescripción ha establecido que, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales; además que, la misma declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones;

Que, por su parte el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, establece los plazos de prescripción, tanto para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, así como para la duración de dicho procedimiento. Respecto al plazo para el inicio del procedimiento, la referida disposición legal prevé un plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad; así también, en cuanto al plazo de duración del procedimiento administrativo disciplinario, se prevé que entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución no puede transcurrir más de un (1) año;

¹ Fundamento tercero de la sentencia recaída en el Expediente N° 2775-2004-AA/TC.

² Fundamento 6 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01912-2012-HC/TC.

³ Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de enero de 2013.

Que, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento de Ley Servir señala lo siguiente: “La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior”. (El subrayado es nuestro);

Que, la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERIVR/TSC, en su fundamento 26, señala: “Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse siempre que el primer plazo –de tres (3) años– no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de los tres (3) años”;

Que, el artículo 94° de la Ley N° 30057 establece que la competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces. Igualmente, precisa que entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año;

Que, a partir de lo señalado, podemos concluir que el ejercicio de la potestad disciplinaria tiene los siguientes límites temporales:

- i. Para el inicio del procedimiento: tres (3) años desde que se cometió la falta y un (1) año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces, toma conocimiento de esta.
- ii. Para la imposición de la sanción: **Un (1) año desde que se inicia el procedimiento hasta la emisión de la resolución de sanción o absolución;**

Que, en atención a la documentación que obra en el expediente administrativo claramente se advierte que, el plazo de prescripción en el presente caso, resulta ser el de un (1) año entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución de sanción o absolución;

Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 22 de mayo de 2020⁴, el pleno del Tribunal consideró que corresponde **la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020**, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios o impulsar los ya iniciados. Al respecto, los **fundamentos 41 y 42** señalaron:

- “41. Sobre la base de lo señalado, debe considerarse que la inactividad que se produce en el periodo del 23 de marzo al 10 de junio de 2020, se presenta de igual modo en los periodos del 16 al 22 de marzo de 2020 y del 11 al 30 de junio de 2020; por tanto, teniendo en cuenta el principio de igual razón, igual derecho, no cabe efectuar distinción alguna y corresponde que la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción también se aplique durante estos periodos.
42. Atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, observancia y respaldo a las medidas adoptadas con el único fin de preservar la vida de la Nación, el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, ante la imposibilidad

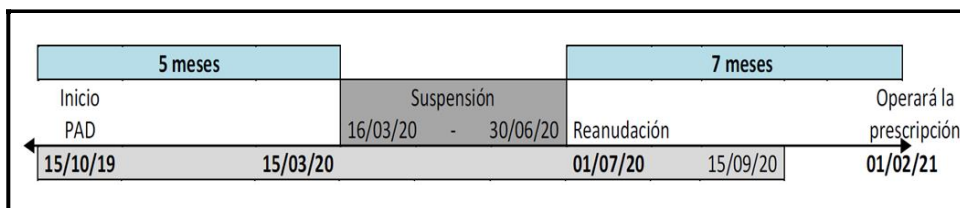
⁴ Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de mayo de 2020.

de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados.

Por consiguiente, a manera de ejemplo, las entidades deberán considerar la siguiente forma de cómputo de los plazos de prescripción:

(...)

Tercer supuesto: Un (1) año de duración del procedimiento contado a partir de la notificación del acto de inicio del procedimiento hasta la emisión de la sanción”.



Que, de la revisión de los documentos que obran en el presente expediente administrativo disciplinario, se puede verificar que mediante las cartas N° 170 y 165-2019-ANA-AAA-U-ALA-PUCALLPA notificadas los días 21 y 17 de octubre de 2019, respectivamente, la Administración Local del Agua Pucallpa en su condición de órgano instructor, dispuso instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui. Con el Informe N° 042-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU de fecha 15 de noviembre de 2019, la referida administración local recomendó a la Unidad de Recursos Humanos en su condición de órgano sancionador del mencionado PAD, imponer al referido servidor la sanción disciplinaria de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios de suspensión sin goce de remuneraciones;

Que, se puede apreciar que mediante la carta N° 172-2019-ANA-OA-URH de fecha 10 de diciembre de 2019, la Unidad de Recursos Humanos en su condición de órgano sancionador remitió al servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui el informe del órgano instructor N° 042-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU, para que el referido servidor de considerarlo necesario, ejerza su derecho de defensa. Así, con la nota de envío N° 189-2019-ANA-AAA.U-ALA.PU la Administración Local del Agua Pucallpa, remitió a la Unidad de Recursos Humanos el cargo de notificación de la carta N° 172-2019-ANA-OA-URH;

Que, con el **proveído de fecha 16 de diciembre de 2019**, la Unidad de Recursos Humanos en su condición de órgano sancionador del procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra del servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui, remitió el expediente administrativo a la Secretaría Técnica de los procedimientos administrativos disciplinarios, para que, en su condición de órgano de apoyo del PAD, elabore el proyecto de resolución de sanción o absolución correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido la resolución respectiva, que dé por concluido en primera instancia el referido procedimiento administrativo disciplinario instaurado;

Que, se verifica que el plazo de prescripción aplicable en el presente caso, resulta ser el de un (1) año desde que se inició el procedimiento administrativo disciplinario hasta la emisión de la resolución de sanción o absolución;

Que, en el presente caso para el cómputo del plazo de prescripción conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil (entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución no puede transcurrir más de un (1) año); se deberá tomar en cuenta la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción comprendida desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, dispuesta a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC;

Que, se ha podido corroborar que con fecha **21 de octubre de 2019**, la Administración Local del Agua Pucallpa en su condición de órgano instructor, dispuso instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor Julio César Labeguerre Inchaustegui, por tanto, a la fecha es evidente que ha transcurrido en exceso el plazo de un (1) año previsto en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, para que, el órgano sancionador emita la resolución de sanción o absolución respectiva. Siendo que, el plazo de prescripción para el presente caso venció a partir del día **09 de febrero de 2021**. El mismo que se puede apreciar, en el siguiente cuadro:

04 MESES 23 DIAS (TIEMPO TRANSCURRIDO)		07 MESES 07 DIAS	
		SUSPENSIÓN	
		16/03/2020	30/06/2020
		REANUDACIÓN	
		OPERARÁ LA PRESCRIPCIÓN	
INICIO DE PAD	15/03/2020	1/07/2020	08/02/2021
21/10/2019		23/10/2020	

Que, siendo consecuencia de la prescripción “*tornar incompetente al órgano sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador*”⁵, este despacho considera que en mérito al plazo de un (1) año previsto en el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil aplicable en el presente caso, la potestad sancionadora de la entidad se ha extinguido por prescripción;

Que, el numeral 10 de la Directiva ha previsto que: “*De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte. Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiere, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento. Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa*”;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del ROF del ANA⁶, la Secretaría General (Gerencia General)⁷ constituye la máxima autoridad administrativa de la Entidad. Siendo así, corresponde en el presente caso a la Gerencia General de la Autoridad Nacional del Agua, emitir el acto resolutorio que declare de oficio la prescripción de la facultad sancionadora de la entidad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario;

Que, en consecuencia, habiendo transcurrido en exceso el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al cual se refiere el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con lo establecido en el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento de la Ley Servir, en el presente caso, ha fenecido la potestad punitiva de la Autoridad Nacional del Agua; consecuentemente, debe declararse prescrita la potestad sancionadora de la

⁵ MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo tercera edición, mayo 2018, Lima, Gaceta Jurídica. p. 471.

⁶ Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua
 “Artículo 13.- De la Secretaría General
 La Secretaría General es el órgano encargado de la marcha administrativa de la entidad; gestiona, coordina y supervisa las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo constituyéndose en la máxima autoridad administrativa. Depende de la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua”.

⁷ Decreto Supremo N.º 054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado
 “Disposiciones Complementarias Finales
 (...)
 Tercera. - Calificación del máximo órgano administrativo de los organismos públicos
 En el marco de lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, adecúese la denominación de las Secretarías Generales de los Organismos públicos, debiéndoseles calificar a partir de la entrada en vigencia de los presentes lineamientos como Gerencias Generales para todos sus efectos”.

Entidad. Es por ello, que corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo correspondiente, conforme a la normatividad de la materia;

De conformidad con lo establecido en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, modificado a través del Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI; y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR de oficio la prescripción de la potestad sancionadora de la Entidad, para la determinación de presunta responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor **Julio César Labeguerra Inchástegui** tramitado en el expediente N° 84402-2021, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, para que evalúe el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar, por la declaración de prescripción efectuada en el artículo precedente.

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos para los fines pertinentes.

Artículo 4.- Remitir los cargos de notificación y/o demás actuados, para su archivo y custodia acorde a sus funciones y se pronuncie de acuerdo a sus atribuciones y competencias.

Artículo 5.- Disponer, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua, www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOSE GENARO MUSAYON AYALA
GERENTE GENERAL (E)
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA